INFORME SECRETARIAL. En relación a la demanda de la referencia, en la fecha paso a Despacho del señor Juez, para resolver recurso de reposición (archivo 08), formulado oportunamente por el apoderado de la parte demandante, contra auto del pasado 10 de febrero del año en curso, por el cual se adicionó el auto admisorio de esta causa judicial, en el sentido de disponer la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (archivo 07). De tal recurso no se corrió traslado, como quiera que aún no se había realizado la notificación a la pasiva. Días hábiles: 12 y 15 de febrero de 2021. Días inhábiles: 13 y 14 de febrero de 2021. Actualmente, se encuentra corriendo términos de traslado a la Agencia Nacional y a la parte demandada. Sírvasse proveer. Armenia Quindío, 19 de mayo de 2021.

MARIA CIELO ÁLZATE FRANCO
Secretaria

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO
Armenia Quindío, mayo veinte (20) de dos mil veintiuno (2021)
ORDINARIO LABORAL 1° INSTANCIA- Radicación: 63001-31-05-003-2020-00190-00

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a decidir el recurso de reposición que fuera formulado por el apoderado de la parte demandante (archivo 08), contra auto del pasado 10 de febrero del año en curso, por el cual se adicionó el auto admisorio de esta causa judicial, en el sentido de disponer la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (archivo 07), conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Mediante providencia No. 061 del nueve (09) de febrero de la presente anualidad (archivo 06), se admitió la demanda promovida por el señor GUSTAVO GONZÁLEZ QUINTERO, en contra del MUNICIPIO DE MONTENEGRO.

De igual forma, a través de auto del 10 de febrero de los corrientes (archivo 07), se dispuso adicionar el anterior proveído, en el sentido de ordenar la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del inciso 6° del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, como quiera que en esta causa judicial se demanda a una entidad pública.

Así las cosas, oportunamente, el abogado de la parte actora interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, bajo el argumento que, en las previsiones de los artículos 1° y 2° del Decreto 1365 de 2013, no se torna obligatoria la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en tanto que la demanda versa contra una entidad del orden territorial y no nacional.

Como quiera que para tal momento no se había notificado a la parte demandada, de tal recurso no se corrió traslado.

A efectos de resolver la impugnación presentada, resulta indispensable señalar que el artículo 612 del C.G.P, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, en lo pertinente, es del siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 612. *Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:*

Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil.

(...)

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, *en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.*

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada.” (Destaca el Despacho).

Así las cosas, para el Despacho es claro que la citada norma no limita la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tan sólo respecto de los procesos que se inician contra La Nación, como pretende hacerlo ver el recurrente, al citar, de manera imprecisa, el Decreto 1365 de 2013. Por el contrario, la redacción de la norma resulta específica, al determinar, que deberá notificársele a tal entidad todos los procesos que se tramiten, en cualquier jurisdicción, en donde sea demandada una entidad pública; criterio último que comprende las entidades territoriales, en este caso, el MUNICIPIO DE MONTENEGRO.

Respecto a los argumentos del mandatario recurrente, conviene destacar que los artículos 610 y 611 del C.G.P hacen referencia a la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en ese sentido, se precisan los términos y las facultades que regirán su intervención, en concordancia con el Decreto 1365 de 2013; mientras que cosa distinta ocurre con el mandato del citado inciso 6° del artículo 612 ibidem, como quiera que en este texto tan sólo se hace referencia a la notificación o comunicación de los procesos a la Agencia, quien deberá determinar, dentro de su competencia, si decide o no intervenir en el proceso. Se reitera, tan sólo es obligatorio enterársele de la existencia de los procesos judiciales en contra de las entidades públicas, cualquiera sea su orden.

Sobre tal tópico, la Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 2014, precisó:

“La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una institución novedosa dentro del orden constitucional vigente. No se trata de una figura que ya existiera y que se está tratando de reformar. Es una institución que responde a visiones actuales del estado y del manejo del gobierno. Su propósito es responder los retos que supone la defensa del Estado, desde una mirada amplia y general, no restringida y particular a cada uno de los casos, considerados aisladamente. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue creada por el Congreso de la República, mediante la Ley 1444 de 2011 (por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones) en su artículo 5°. ^[18] El objetivo de la Entidad es doble, la producción de las políticas de prevención del daño antijurídico, para lo cual deberá estructurar, formular, aplicar, evaluar y difundir dichas políticas. Y, además, la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales públicas, con el fin de que se reduzca la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Se trata de funciones generales que no buscan que la agencia realice directamente la defensa del Estado, sino que la estructure de forma amplia y general. ^[19]

(...)

3.1.2. El artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011 consagra las funciones de la Agencia en relación con las políticas, ^[20] en relación con la coordinación de la defensa del Estado, ^[21] en relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la defensa ^[22] y en relación con el ejercicio de la representación. ^[23] **Es importante resaltar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no tiene como competencia única y exclusiva la posibilidad de representar a la Nación. También puede ejercer la representación judicial de las entidades territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder.** Pero, obviamente, se trata de una función extraordinaria, que no hace parte de sus actividades centrales. El artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011, en su tercer párrafo establece que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no será la parte demandada; dispone la norma: “Párrafo 3°. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en ningún caso tendrá la condición sustancial de parte demandada en los procesos que se adelanten contra las demás entidades públicas, razón por la cual no podrán dirigirse contra ella las pretensiones de la demanda y no podrá ser convocada a tales procesos a ningún título. En ningún caso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asumirá las obligaciones patrimoniales de las entidades públicas en cuyo nombre actúe.” Finalmente, se establece el sistema LITIGOB (sistema único de información Litigiosa del Estado Colombiano) como fuente de información. ^[24]

3.2. Obligación de notificación.

El artículo 612 del Código General del Proceso, hace parte del capítulo dedicado a las disposiciones relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El artículo 610 del Código se ocupa de establecer que la Agencia podrá actuar, en cualquier estado del proceso sea cual fuere la jurisdicción. Posteriormente, el artículo 611 dispone que el proceso se suspenda por treinta días cuando la Agencia decida intervenir, para luego, en el artículo 612 ocuparse de la notificación del proceso. Para tal fin, se resuelve modificar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo pertinente (el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011). El artículo incluyó dos incisos adicionales a los cinco que originalmente tenía. ^[25] Para darle a conocer la existencia de un proceso en contra de la Nación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y que ésta pueda decidir si se vincula o no, el legislador decidió modificar el artículo que regula la notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas y demás. El séptimo inciso se ocupa de consagrar los términos en los que debe ser hecha esa notificación que son, básicamente, los mismos que se establecen para la parte demandada.

El propósito de las normas citadas es armonizar las disposiciones de carácter procesal con las competencias de la Agencia en cuestión. Incluir dentro de la nueva legislación procesal de Colombia (el Código General del Proceso, CGP), las reglas básicas que hagan posible la adecuada intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dentro de los procesos judiciales que se adelanten contra la Nación (y aquellos contra entidades territoriales que, excepcionalmente, decida la Agencia seleccionar). Así, el artículo 610 del CGP [Ley 1564 de 2012] reconoce una amplia competencia de la Agencia dentro del trámite del proceso, permitiéndole participar en cualquier momento. En el

sentido similar, el artículo 612 del CGP busca armonizar la legislación previa (en este caso, el procedimiento Contencioso Administrativo) con las competencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.” (Destaca el Despacho).

Conforme a los criterios esbozados, el Despacho mantendrá inmodificable la decisión recurrida. En todo caso, de la revisión del expediente se observa que la notificación a la referida Agencia de Defensa Jurídica se surtió el día 17 de marzo del año en curso (archivo 11) y a la demandada MUNICIPIO DE MONTENEGRO se realizó el día 26 de febrero de los corrientes, por lo que actualmente se encuentran surtiendo términos de traslado, mismos que, con ocasión a la decisión de este recurso, resultan suspendidos.

Por lo expuesto, el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA QUINDÍO,

RESUELVE:

PRIMERO: MANTENER INMODIFICABLE el proveído del diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), mediante el cual se adicionó el auto admisorio de esta causa judicial, en el sentido de disponer la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto, REANÚDENSE los términos de traslado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Municipio de Montenegro.

NOTIFÍQUESE,

LUIS DARÍO GIRALDO GIRALDO

Juez

19/05/2021- DCBH

Firmado Por:

LUIS DARIO GIRALDO GIRALDO

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 003 LABORAL DEL CIRCUITO ARMENIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bcf8b0390fa6322bfa71357a9373640e600c49a7c080f479fda8c8fe4a572ed1**

Documento generado en 20/05/2021 04:02:12 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>